

**DECRETO NÚMERO 2363 DE 2019**

(diciembre 26)

por medio del cual se modifica el artículo 2.2.13.5.2. del Decreto 1833 de 2016 en relación con la forma de pago del beneficio económico periódico o anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en desarrollo del artículo 87 de la Ley 1328 de 2009, y

**CONSIDERANDO:**

Que el inciso décimo segundo del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, establece "(...) la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al Salario Mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión".

Que el artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 "Por el cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores, y otras disposiciones" establece los requisitos mínimos necesarios para otorgar los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante Documento CONPES 156 de 2012 definió el diseño e implementación de los Beneficios Económicos Periódicos, señalando que la base para realizar la liquidación del ingreso mensual o periódico para la vejez en ningún caso podría superar el 85% de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).

Que el Decreto 604 de 2013 "por el cual se reglamenta el acceso y operación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)", definió el pago mensual del beneficio en el numeral 1 del artículo 12, el cual señalaba que se podía "contratar, a través de la administradora del mecanismo BEPS, con una compañía de seguros legalmente constituida, el pago de una suma de dinero mensual o beneficio económico periódico, hasta su muerte, con cargo a los recursos ahorrados, los rendimientos generados y el subsidio periódico a que haya lugar. Este beneficio no podrá superar el ochenta y cinco por ciento (85%) de un salario mínimo mensual legal vigente y se ajustará cada año de acuerdo con la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor certificada por el DANE para el año inmediatamente anterior".

Que posteriormente el artículo 12 del Decreto 604 de 2013 fue modificado por el artículo 3 del Decreto 2983 de 2013, compilado en el artículo 2.2.13.2.1. del Decreto 1833 de 2016 requisitos de ingreso.

Que en cuanto a la periodicidad del pago de la anualidad vitalicia se dispuso que, una vez el vinculado cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.13.5.1. del Decreto 1833 de 2016 podrá, entre otras opciones, contratar a través de la administradora del mecanismo BEPS, en forma irrevocable con una compañía de Seguros de Vida legalmente constituida, una anualidad vitalicia pagadera bimestralmente y hasta su muerte, con cargo a los recursos ahorrados.

Que se hace necesario precisar que el valor mensual de la anualidad vitalicia no puede superar el valor del 85% de un salario mínimo legal mensual vigente, sin embargo, el pago de dicha anualidad se realizará bimestralmente.

Que en cumplimiento del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio del Trabajo.

En mérito de lo expuesto,

**DECRETA:**

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.13.5.2. del Decreto 1833 de 2016. Modifíquese el artículo 2.2.13.5.2. relativo a la destinación de recursos del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos, el cual quedará así:

"**Artículo 2.2.13.5.2. Destinación de Recursos del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos.** El beneficiario, una vez cumpla los requisitos establecidos en el artículo 2.2.13.5.1. de este Decreto, podrá destinar los recursos para:

1. Contratar a través de la administradora del mecanismo BEPS en forma irrevocable, con una compañía de seguros legalmente constituida, el pago de un beneficio económico periódico o anualidad vitalicia hasta su muerte, con cargo a los recursos ahorrados, los rendimientos generados y el subsidio periódico a que haya lugar.

El valor del beneficio será liquidado mensualmente y no podrá superar en el mes el ochenta y cinco por ciento (85%) de un salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV) y deberá reajustarse cada año de acuerdo con la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE para el año inmediatamente anterior. En todo caso, con el fin de optimizar los costos operativos de este Servicio Social Complementario, el pago de la anualidad vitalicia o beneficio económico periódico deberá efectuarse bimestralmente.

Si en el momento de contratar el pago de la anualidad vitalicia o beneficio económico periódico, los recursos aportados más sus rendimientos y el valor del incentivo periódico superan el porcentaje establecido en el presente artículo, el capital que exceda dicho

porcentaje se devolverá al beneficiario del mecanismo BEPS, con sus respectivos rendimientos financieros.

2. Solicitar la devolución de la suma ahorrada y sus rendimientos en un único pago, evento en el cual no se hará acreedor al subsidio periódico. En este caso, la administradora del mecanismo BEPS deberá informar al beneficiario los riesgos de esta decisión.
3. Pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad. En este caso la administradora del mecanismo BEPS deberá informar al beneficiario los riesgos de esa decisión. En este evento se hará acreedor del subsidio periódico.
4. Trasladar los recursos al sistema general de pensiones observando las reglas del Capítulo 7 de este título. En todo caso, el beneficiario no podrá obtener un doble subsidio proveniente del Estado relacionado con pensiones, incluyendo el sistema general de pensiones, simultáneamente con el incentivo o subsidio periódico establecido en el Servicio Social Complementario de BEPS.

Parágrafo 1°. Para la selección de la aseguradora que expedirá la anualidad vitalicia BEPS, la administradora deberá sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 2.36.2.1.1. del Decreto número 2555 de 2010 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, salvo que suscriba convenio interadministrativo para la prestación de este servicio.

La administradora del mecanismo adelantará los trámites necesarios para la contratación de la anualidad vitalicia por parte del beneficiario del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos. En la cotización de la anualidad vitalicia, no se podrá incluir ningún monto para el pago de comisiones de intermediación de seguros. La anualidad vitalicia no estará sujeta a ninguna exclusión y la obligación del pago del beneficio se extinguirá con el fallecimiento del único beneficiario del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos.

Parágrafo 2°. Si la persona vinculada a BEPS fallece antes de cumplir la edad para hacerse acreedor al Beneficio Económico Periódico, el monto del ahorro realizado, más sus rendimientos les serán devueltos a los herederos, sin que se genere el subsidio del Estado. Para tal fin, se seguirán los lineamientos que respecto de la exención del juicio de sucesión, la Superintendencia Financiera de Colombia fija para los establecimientos bancarios".

Artículo 2°. *Derogatorias y vigencias.* Este Decreto modifica el artículo 2.2.13.5.2. del Decreto 1833 de 2016 y rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2019.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

La Ministra del Trabajo,

Alicia Victoria Arango Olmos.

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**

**RESOLUCIONES**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 4 - 0906 DE 2019**

(diciembre 26)

por la cual se prorroga la delegación de la función de fiscalización en el departamento de Antioquia, se amplía el alcance de la delegación de esta función y se toman otras determinaciones.

La Ministra de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Acto Legislativo número 05 del 2011, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998; los artículos 7° y 13 de la Ley 1530 de 2012, el artículo 30 de la Ley 1955 de 2011 y el numeral 15 del artículo 2° del Decreto 0381 de 2012, y

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Acto Legislativo número 5 de 2011, el numeral 3 del artículo 7° de la Ley 1530 de 2012 y el numeral 15 del artículo 2° del Decreto 0381 de 2012, es función del Ministerio de Minas y Energía fiscalizar la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables;

Que el artículo 13 de la Ley 1530 de 2012, define la fiscalización como "(...) el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de exploración y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos y ambientales, como base determinante para la adecuada determinación recaudo de regalías y compensaciones y el funcionamiento del Sistema General de Regalías";

Que mediante el artículo 30 de la Ley 1955 de 2019 se determinó que: "[l]as labores de exploración y explotación que se desarrollen a través de las figuras de reconocimientos de propiedad privada, autorizaciones temporales, áreas de reserva especial declaradas y

*delimitadas por la autoridad minera nacional, solicitudes de legalización y formalización minera y mecanismos de trabajo bajo el amparo de un título minero serán objeto de fiscalización”;*

Que el numeral 15, artículo 2° del Decreto 381 de 2012 estableció que el Ministerio de Minas y Energía tiene la función de “(...) *fiscalizar la exploración y explotación de los yacimientos, directamente o por la entidad a quien delegue*”;

Que mediante Resolución 181492 de 30 de agosto de 2012 se delegó en el departamento de Antioquia, por el término de un año, la función de fiscalización de los títulos mineros vigentes en jurisdicción del departamento de Antioquia;

Que mediante Resolución 91818 de 2012, se modificó el artículo 3° de la Resolución 181492 de 30 de agosto de 2012, en el sentido de delegar a la gobernación de Antioquia, única y exclusivamente lo relativo a la función de fiscalización de los títulos mineros y autorizaciones temporales vigentes en la jurisdicción del departamento de Antioquia, en los términos del artículo 13 de la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012;

Que, en la actualidad, conforme con la Resolución 40420 del 14 de mayo de 2019, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019, la delegación de la función de fiscalización efectuada al departamento de Antioquia a través de Resolución 181492 de 2012, modificada por la Resolución 91818 de 2012;

Que mediante Radicado 2019030694510 del 18 de noviembre de 2019 dirigido a la Ministra de Minas y Energía, la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia solicitó que se prorrogue la delegación por el término de un (1) año, contado a partir del 1° de enero de 2020, con el fin de que “(...) *el nuevo Gobierno Departamental pueda gestionar, planear el Plan de Desarrollo Departamental a ejecutar en el periodo de Gobierno 2020-2023 y asuma el conocimiento de la Secretaría de Minas*”;

Que mediante Memorando 2019090322 del 20 de diciembre de 2019, la Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía presentó la memoria justificativa con los antecedentes, oportunidad y conveniencia de prorrogar por tres (3) meses la delegación de la función de fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos minerales, en el departamento de Antioquia, considerando principalmente lo siguiente: (i) En el mes de enero de 2020 se dará el cambio de administración en el departamento de Antioquia, razón por la cual la prórroga para la finalización del bienio, deberá ser analizada con el Gobernador que asuma el cargo; (ii) El Ministerio de Minas y Energía no cuenta con el recurso humano especializado ni con la infraestructura física necesaria y adecuada para reasumir la actividad de fiscalización inmediatamente; (iii) la continuidad de la delegación permite la realización ininterrumpida de las labores de fiscalización y desarrollo de los procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de exploración y producción;

Que así mismo, se debe ampliar el alcance de la función delegada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 1955 de 2019 respecto de las demás figuras o instrumentos que por mandato legal permiten la exploración y explotación minera, con excepción de las áreas de reserva especial declaradas y delimitadas por la autoridad minera nacional, las cuales serán objeto de fiscalización por la Agencia Nacional de Minería, teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía no cuenta con el recurso humano especializado ni con la infraestructura física necesaria y adecuada para realizar las actividades de fiscalización, razón por la cual esta función debe ser delegada en otras entidades que sí cuentan con las herramientas para ejecutarla, como por ejemplo la Gobernación de Antioquia o la Agencia Nacional de Minería;

Que adicionalmente, es pertinente dar claridad sobre la entidad delegada competente para realizar la función de fiscalización cuando existan títulos mineros cuya área sea común entre el departamento de Antioquia y otro departamento;

Que, por tal motivo, se considera que la prórroga de la delegación, se debe extender hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2020;

Que, en mérito de lo anterior,

#### RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta el 31 de marzo de 2020 la delegación efectuada al Departamento de Antioquia, a través de la Resolución 181492 de 2012, modificada por la Resolución 91818 de 2012, de la fiscalización de los títulos mineros y autorizaciones temporales vigentes en su jurisdicción.

Parágrafo. La fiscalización de los títulos mineros cuya área sea común entre el departamento de Antioquia y otro departamento, serán realizadas por la Agencia Nacional de Minería.

Artículo 2°. Ampliar el alcance de la delegación de la función de fiscalización efectuada al Departamento de Antioquia en su jurisdicción, a las labores de exploración y explotación que se desarrollen a través de las figuras de reconocimientos de propiedad privada, solicitudes de legalización y formalización minera y mecanismos de trabajo bajo el amparo de un título minero, de las que trata el artículo 30 de la Ley 1955 de 2019, de conformidad con la normatividad vigente.

Parágrafo. La delegación de la que trata este artículo estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020.

Artículo 3°. Para los efectos del alcance de la delegación que por esta resolución se efectúa, se celebrará el respectivo otrosí al convenio de que trata el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, entre el Ministerio de Minas y Energía y la Gobernación de Antioquia.

Artículo 4°. La delegación de la función de fiscalización podrá ser reasumida por el Ministerio de Minas y Energía cuando este así lo estime conveniente.

Artículo 5°. Por la Dirección de Minería Empresarial, comuníquese el presente acto administrativo al gobernador de Antioquia y a la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial**.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

La Ministra de Minas y Energía,

*María Fernanda Suárez Londoño.*

(C. F.).

## MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

### RESOLUCIONES

#### RESOLUCIÓN NÚMERO 0909 DE 2019

(diciembre 9)

*por la cual se designa la participación en la Mesa de Concertación y Protocolización del Plan de Salvaguarda del pueblo Totoró.*

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en la Constitución Política, el Decreto 3571 de 2011 y,

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 208, define que a los Ministros como jefes de la administración en sus respectivas carteras, les corresponde bajo la dirección del Presidente de la República, formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la desconcentración y la delegación de funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, establece: “*La Ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegaren sus subalternos o en otras autoridades. (...)*”.

Que el artículo 1° del Decreto 3571 de 2011, establece como objetivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que la Dirección de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, conforme al artículo 21 del Decreto 3571 de 2011, tiene dentro de sus funciones, entre otras, “*1. Orientar la formulación e implementación de programas del sector de agua potable y saneamiento básico, en los temas de su competencia; 2. Apoyar la formulación e implementación de la política integral de residuos sólidos en los aspectos relacionados con el servicio público de aseo y su aprovechamiento, en coordinación con otras entidades competentes (...); 4. Proponer y estructurar planes, programas y proyectos orientados a cumplir los objetivos y políticas sectoriales e incentivar la aplicación de principios de gestión empresarial eficiente en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; 5. Apoyar el desarrollo de mecanismos de financiación y manejo de recursos para la implementación de planes, programas y proyectos del sector;*

(...) *9. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en la implementación de planes y programas de su competencia, en coordinación con las entidades competentes; 10. Apoyar técnicamente la elaboración de propuestas normativas que permitan desarrollar las políticas, planes y proyectos en el sector de agua potable y saneamiento básico relativas a su competencia; 11. Dar viabilidad a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con el apoyo financiero de la Nación (...)*”.

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-025 de 2004, declaró “la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos